

No. 37739

**Argentina
and
Colombia**

Agreement on judicial assistance in criminal matters between the Argentine Republic and the Republic of Colombia. Buenos Aires, 3 April 1997

Entry into force: *1 February 2001, in accordance with article 27*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 1 September 2001*

**Argentine
et
Colombie**

Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la République argentine et la République de Colombie. Buenos Aires, 3 avril 1997

Entrée en vigueur : *1er février 2001, conformément à l'article 27*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 1er septembre 2001*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

Los Gobiernos de la República Argentina y de la República de Colombia,

ANIMADOS por el propósito de intensificar la asistencia judicial y la cooperación en materia penal;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;

CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que los unen;

EN OBSERVANCIA de las normas constitucionales, legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto a los principios de Derecho Internacional;

REAFIRMANDO el respeto de la soberanía nacional y la igualdad de derechos e intereses recíprocos;

CONVENCIDOS de la necesidad de desarrollar acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de la coordinación y ejecución de programas concretos y de agilizar los mecanismos tradicionales de asistencia legal y judicial;

CONSCIENTES que el incremento de las actividades delictivas hace necesario el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y asistencia legal y judicial en materia penal.

ACUERDAN:

ARTICULO 1

AMBITO DE APLICACIÓN

Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y de sus respectivos ordenamientos jurídicos, en la realización de investigaciones y procedimientos penales iniciados por hechos cuyo conocimiento corresponda a las autoridades competentes de la Parte Requerente.

La asistencia será prestada aun cuando los hechos por los cuales se solicita no constituyesen delito según las leyes de la Parte Requerida.

Sin embargo, cuando la solicitud de asistencia se refiera a la ejecución de un decomiso, medidas provisionales o cautelares, registros domiciliarios, interceptación de telecomunicaciones y correspondencia o inspecciones judiciales, la asistencia será concedida únicamente si el hecho por el que se solicitase fuera considerado delito también por la legislación de la Parte Requerida.

ARTICULO 2

DEFINICIONES

1. Para los efectos del presente Acuerdo:
 - a) **“Carta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia judicial”** se entenderán como sinónimos.
 - b) **“Decomiso”** : significa la privación con carácter definitivo de bienes, productos o instrumentos del delito, por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente.
 - c) **“Instrumentos del delito”**: significa cualquier bien utilizado o destinado a ser utilizado para la comisión de un delito.
 - d) **“Producto del delito”**: significa bienes de cualquier índole, derivados u obtenidos directa o indirectamente, por cualquier persona, de la comisión de un delito o el valor equivalente de tales bienes.
 - e) **“Bienes”**: significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
 - f) **“Embargo Preventivo, Secuestro o Incautación de Bienes”**: significa la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, así como la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad competente.

ARTICULO 3

ALCANCE DE LA ASISTENCIA

1. Las Partes se prestarán asistencia mutua en el intercambio de información, pruebas, enjuiciamientos y actuaciones en materia penal. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:
 - a) Localización e identificación de personas y bienes;
 - b) Notificación de actos judiciales;

- c) Remisión de documentos e informaciones judiciales;
 - d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;
 - e) Recepción de testimonios e interrogatorio de imputados;
 - f) Citación y traslado voluntario de personas para los efectos del presente Acuerdo, en calidad de imputados, testigos o peritos;
 - g) Traslado de personas detenidas, para rendir testimonio en el territorio de la Parte Requirente;
 - h) Embargo, secuestro y decomiso de bienes;
 - i) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la Parte Requerida lo permita y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del presente Acuerdo.
2. Las Partes facilitarán el ingreso y la presencia en el territorio del Estado Requerido de autoridades competentes de la Parte Requirente a fin de que asistan y participen en la práctica de las actuaciones solicitadas, siempre que ello no contravenga lo dispuesto en su legislación interna. Los funcionarios de la Parte Requirente actuarán conforme a la autorización de las autoridades competentes de la Parte Requerida.

ARTICULO 4

LIMITACIONES EN EL ALCANCE DE LA ASISTENCIA

1. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este Acuerdo para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia judicial, sin previa autorización de la Parte Requerida.
2. Este Acuerdo no facultará a las Partes para ejecutar, en el territorio del Estado donde se realizan las diligencias, funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de dicho Estado de conformidad con su legislación interna.
3. Este Acuerdo no se aplicará a:
 - a) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición;
 - b) El traslado de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal;
 - c) La asistencia a particulares o terceros Estados.

ARTICULO 5

AUTORIDADES CENTRALES

1. Las solicitudes de asistencia que en virtud del presente Acuerdo se formulen , así como sus respuestas, serán enviadas y recibidas a través de las autoridades centrales, tal como se indica en el siguiente enunciado :
 - a. Por la parte argentina, la autoridad central será el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
 - b. Con relación a las solicitudes de asistencia recibidas por Colombia, la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación ; con relación a las solicitudes de Asistencia Judicial presentadas por Colombia , la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. A este fin, las autoridades centrales se comunicarán directamente entre ellas y remitirán las solicitudes, según el caso, a sus autoridades competentes.

ARTICULO 6

AUTORIDADES COMPETENTES

Las Autoridades Competentes son, en la República Argentina, las autoridades judiciales y el Ministerio Público Fiscal y en la República de Colombia, las autoridades judiciales.

ARTICULO 7

LEY APLICABLE

- a) Las solicitudes serán cumplidas de conformidad a la legislación de la Parte Requerida, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo.
- b) La Parte Requerida prestará la asistencia judicial de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud de la Parte Requirente, salvo cuando éstas sean incompatibles con su ley interna.

ARTICULO 8

CONFIDENCIALIDAD

1. La Parte Requerida mantendrá bajo reserva la solicitud de asistencia judicial, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento.

2. Si para el cumplimiento o ejecución del requerimiento fuere necesario el levantamiento de la reserva, la Parte Requerida solicitará su aprobación a la Parte Requirente, mediante comunicación escrita, sin la cual no se ejecutará la solicitud.
3. La Parte Requirente mantendrá la reserva de las pruebas e información proporcionadas por la Parte Requerida, salvo que su levantamiento sea necesario para la investigación o procedimientos descritos en la solicitud.

ARTICULO 9

SOLICITUDES DE ASISTENCIA JUDICIAL

1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito. Bajo circunstancias de carácter urgente o en el caso que sea permitido por la Parte Requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o por cualquier otro medio electrónico, pero deberán ser formalizadas a la mayor brevedad posible y contendrán al menos la siguiente información:
 - a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento judicial;
 - b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada;
 - c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la solicitud de asistencia judicial, adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el texto de las disposiciones legales pertinentes;
 - d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desea que se practique;
 - e) El término dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
 - f) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada y la relación que dicha persona guarda con la investigación o el proceso;

Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que sea citada para la ejecución de pruebas.

ARTICULO 10

ASISTENCIA CONDICIONADA

1. La Autoridad competente de la Parte Requerida, si determina que la ejecución de una solicitud habrá de obstaculizar alguna investigación o procedimiento penal que se esté

realizando en dicho Estado, podrá aplazar su cumplimiento o condicionarlo en la forma que considere necesaria.

2. La Autoridad Central de la Parte Requerida pondrá en conocimiento de la Autoridad Central de la Parte Requirente lo expuesto en el párrafo anterior, a fin que ésta acepte la asistencia condicionada en cuyo caso tendrá que someterse a las condiciones establecidas.
3. Cuando una solicitud de asistencia judicial no pudiese ser cumplida en todo o en parte, la Parte Requerida lo comunicará a la Parte Requirente señalando expresamente los motivos o causas del incumplimiento, caso en el cual la Parte Requirente decidirá si insiste en la solicitud o desiste de ella.

ARTICULO 11

RECHAZO DE LA SOLICITUD

1. La Parte Requerida podrá negar la asistencia cuando:
 - a) La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento jurídico o no sea conforme a las disposiciones de este Acuerdo;
 - b) Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una investigación o proceso penal en curso en dicho Estado, salvo lo dispuesto en el Artículo 10 del presente Acuerdo;
 - c) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito respecto del cual la persona haya sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, o habiéndosela condenado, se hubiere cumplido o extinguido la pena;
 - d) La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación;
 - e) El otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales del Estado Requerido;
 - f) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito político, militar o conexo con éstos.
2. La Parte Requerida informará mediante escrito motivado a la Parte Requirente la denegación de asistencia.

ARTICULO 12

EJECUCION DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL

1. La Parte Requerida fijará la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia judicial y las comunicará por escrito a solicitud de la Parte Requirente.
2. Las pruebas que se practiquen por las autoridades competentes de la Parte Requerida se ejecutarán de conformidad con su ordenamiento jurídico. La valoración de dichas pruebas se regirá por el ordenamiento interno de la Parte Requirente.
3. La Parte Requerida de conformidad con su legislación interna y, a solicitud de la Parte Requirente, podrá recibir testimonio de personas con destino a un proceso o investigación que se siga en el Estado Requirente. La Parte Requirente podrá solicitar la ejecución de las pruebas necesarias de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.
4. El interrogatorio deberá ser presentado por escrito y la Parte Requerida, después de evaluarlo, decidirá si procede o no.
5. La Parte Requerida a solicitud de la Parte Requirente, podrá facilitar con fines probatorios, copias de documentos oficiales o privados, antecedentes o informaciones que reposen en un organismo o dependencia gubernamental o privada de dicha Parte, siempre que su legislación interna lo permita.
6. Las pruebas practicadas por las autoridades competentes de la Parte Requerida, en originales o copias autenticadas, serán remitidas a la Parte Requirente a través de la Autoridad Central.
7. Los documentos u objetos que hubieran sido enviados en cumplimiento de una solicitud de asistencia judicial, deberán ser devueltos lo antes posible por la autoridad competente de la Parte Requirente, a menos que la Parte Requerida renuncie a ellos.

ARTICULO 13

COMPARECENCIA ANTE LA PARTE REQUIRENTE

1. La solicitud de asistencia judicial enviada a las autoridades competentes de la Parte Requerida, que tenga por objeto la citación de un imputado, testigo o perito ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, deberá ser transmitida por la Autoridad Central de la Parte Requirente por lo menos 45 días antes a la fecha fijada para la ejecución de la diligencia objeto de la solicitud.

En caso contrario, la Autoridad Central Requerida lo devolverá a la Parte Requirente. No obstante, la Autoridad Central de la Parte Requerida podrá solicitar por escrito a la Parte Requirente la ampliación del término.

2. La autoridad competente de la Parte Requerida procederá a efectuar la citación según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o

sanciones previstas en la legislación de la Parte Requirente para el caso de no comparecencia.

3. La solicitud de asistencia judicial deberá mencionar el importe de los viáticos, dietas e indemnizaciones que pueda percibir la persona citada con motivo de su traslado

ARTICULO 14

GARANTIA TEMPORAL

1. El testigo o perito que como consecuencia de una citación compareciere ante la autoridad competente de la Parte Requirente, no podrá ser perseguido o detenido por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida.
2. Una persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que exprese su consentimiento por escrito para comparecer ante las autoridades competentes de la Parte Requirente con el fin de que responda por hechos que son objeto de un proceso contra él, no podrá ser enjuiciada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su libertad personal por hechos o condenas anteriores a su partida del territorio de la Parte Requerida, diferentes a los que fueron especificados en tal citación.
3. La garantía temporal prevista en los párrafos precedentes cesará en sus efectos cuando la persona que compareciera no hubiese abandonado el territorio de la Parte Requirente, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, en un plazo de 10 días desde que le hubiere sido notificado por las autoridades competentes que su presencia no es más necesaria o habiéndolo abandonado, regresare al mismo, salvo en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 15

TRASLADO DEL DETENIDO

1.
 - a) Cuando la citación para declarar ante la autoridad competente de la Parte Requirente se refiera a una persona detenida en el territorio de la Parte Requerida, para acceder a la solicitud será indispensable que el detenido preste su consentimiento por escrito.
 - b) La autoridad competente de la Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla en las mismas condiciones tan pronto como hubiere cesado la necesidad que motivó la solicitud que diera lugar al traslado, a menos que la autoridad competente de la Parte Requerida solicitare expresamente y por escrito que tal persona fuera puesta en libertad.

- c) Los gastos ocasionados por la aplicación de este artículo correrán por cuenta de la Parte Requerente.
2. En todos los casos, la decisión sobre el traslado en virtud del párrafo 1 del presente artículo, será discrecional de la autoridad competente de la Parte Requerida y la negativa podrá fundamentarse, entre otras consideraciones, en razones de conveniencia o de seguridad.

ARTICULO 16

PRODUCTOS DEL DELITO

1. Las autoridades competentes de la Parte Requerida, previa solicitud de asistencia judicial, se esforzarán en averiguar si dentro de su jurisdicción se encuentra cualquier producto o instrumento de un delito y notificarán los resultados o las pesquisas a las autoridades competentes de la Parte Requerente a través de las Autoridades Centrales. Al efectuar el requerimiento, la Parte Requerente notificará a la Parte Requerida la base de su creencia de que dichos productos o instrumentos del delito se pueden hallar en su jurisdicción.
2. Cuando en cumplimiento del párrafo 1 se encuentren los productos o instrumentos del delito objeto de la solicitud de asistencia judicial, la Parte Requerida a pedido de la Parte Requerente, tomará las medidas necesarias permitidas por sus leyes para evitar cualquier transacción, transferencia o enajenación de los mismos mientras esté pendiente una decisión definitiva sobre dichos productos o instrumentos.
3. Cuando el condenado por un delito ha dispuesto de los productos o instrumentos del mismo, la autoridad competente de la Parte Requerida, a solicitud de la autoridad competente de la Parte Requerente, determinará si el tercero los obtuvo sin haber sabido o sospechado que se trataba o podía haberse tratado de los productos o instrumentos del delito. Si la autoridad competente de la Parte Requerida determina que el tercero no actuó de buena fe, ordenará el decomiso de los bienes.

ARTICULO 17

MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y de acuerdo con las previsiones del presente artículo, la autoridad competente de una de las Partes podrá solicitar a la otra que obtenga una orden con el propósito de embargar preventivamente, secuestrar o incautar bienes para asegurar que éstos estén disponibles para la ejecución de una orden de decomiso.
2. Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:
 - a) Una copia de la orden de embargo preventivo, secuestro o incautación;

- b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;
 - c) Si fuera posible, una descripción de los bienes, su valor comercial respecto de los cuales se pretende se efectúe la medida provisional o cautelar, o que se considera están disponibles para el embargo preventivo, secuestro o la incautación y la relación de éstos con la persona contra la que se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
 - d) Una declaración de la suma que se pretende embargar, secuestrar o incautar y de los fundamentos del cálculo de la misma;
 - e) La estimación del tiempo que transcurrirá antes de que el caso sea transmitido a juicio y del tiempo que pasará hasta que se dicte la decisión judicial definitiva.
- 3. La autoridad competente de la Parte Requirente informará a la autoridad competente de la Parte Requerida de cualquier modificación en el plazo a que se hace referencia en la letra e) del párrafo anterior y al hacerlo, indicará la etapa de procedimiento que se hubiera alcanzado.
 - 4. Las autoridades competentes de cada una de las Partes informará con prontitud sobre el ejercicio de cualquier recurso o de una decisión adoptada respecto del embargo, secuestro o incautación solicitada o adoptada.
 - 5. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá imponer una condición que limite la duración de la medida solicitada, la cual será notificada con prontitud a la autoridad competente de la Parte Requirente, explicando su motivación.
 - 6. Cualquier requerimiento deberá ser ejecutado únicamente conforme a la legislación interna de la Parte Requerida y en particular, en observancia y garantía de los derechos de cualquier persona que pueda ser afectada por la ejecución de la medida.

ARTICULO 18

EJECUCION DE ORDENES DE DECOMISO

- 1. En el caso de que el requerimiento de asistencia se refiera a una orden de decomiso, la autoridad competente de la Parte Requerida podrá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1:
 - a) Ejecutar la orden de decomiso emitida por una autoridad competente de la Parte Requirente relativa a los instrumentos o productos del delito; o
 - b) Iniciar un procedimiento con el objeto de obtener una orden de decomiso, conforme a su legislación interna.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 9 del presente Acuerdo, para los efectos del presente artículo, deberá incluirse lo siguiente:
 - a) Una copia de la orden de decomiso, debidamente certificada por el funcionario judicial que la expidió;
 - b) Información sobre las pruebas que sustentan la base sobre la cual se dictó la orden de decomiso;
 - c) Información que indique que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada;
 - d) Cuando corresponda la identificación de los bienes disponibles para la ejecución o los bienes respecto de los cuales se solicita la asistencia judicial, declarando la relación existente entre esos bienes y la persona contra la cual se expidió la orden de decomiso;
 - e) Cuando sea procedente y se conozca, la información acerca de la existencia de antecedentes relacionados con derechos o intereses legítimos de terceras personas sobre los bienes objeto del requerimiento;
 - f) Cualquier otra información que pueda ayudar a los fines de la ejecución de la solicitud de asistencia judicial.
3. Cuando la legislación interna de la Parte Requerida no permita ejecutar una solicitud en su totalidad, ésta podrá darle cumplimiento en la medida en que fuere posible y lo comunicará a través de la Autoridad Central.
4. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá solicitar información o pruebas adicionales con el fin de llevar a cabo el requerimiento.
5. La orden de decomiso se ejecutará de acuerdo con la legislación interna de la Parte Requerida y, en particular, en observancia de los derechos de cualquier persona que pueda ser afectada por su ejecución.
6. En cada caso, la Parte Requerida podrá acordar con la Parte Requirente la manera de compartir el valor de los bienes obtenidos como resultado de la ejecución del requerimiento por la Parte Requerida en cumplimiento de este artículo, tomando en consideración los lineamientos establecidos en el artículo 5.5 (b) (ii) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y teniendo en cuenta la cantidad de información y cooperación suministrada por la Parte Requerida.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios.

ARTICULO 19

INTERESES DE TERCEROS DE BUENA FE SOBRE LOS BIENES

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, las autoridades competentes de la Parte Requerida tomarán según su ley las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de terceras personas de buena fe sobre los bienes afectados por la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.

Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo, secuestro, incautación o decomiso, podrá interponer los recursos previstos en la legislación interna de la Parte Requerida ante la autoridad competente de dicha Parte.

ARTICULO 20

GASTOS

1. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia judicial serán sufragados por la Parte Requerida. Cuando se requieran para este fin gastos de carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se dará cumplimiento al requerimiento, así como la manera en que se sufragarán los gastos.
2. Los honorarios de peritos, gastos de viaje, alojamiento u otros gastos de imputados, testigos o peritos que deban trasladarse en virtud de una solicitud de asistencia judicial, incluyendo aquellos de los funcionarios que lo acompañen, correrán por cuenta de la Parte Requirente.

ARTICULO 21

COMUNICACION DE CONDENAS

Cada Autoridad Central informará anualmente a la otra las sentencias condenatorias que sus autoridades judiciales hubieran dictado contra nacionales de la otra Parte.

ARTICULO 22

ANTECEDENTES PENALES

1. Cada Autoridad Central comunicará a pedido de la otra los antecedentes penales de una persona en la medida que lo permitan sus propias leyes.

2. Por antecedentes penales se entenderá únicamente las condenas dictadas en sentencias judiciales con carácter definitivo.

ARTICULO 23

DENUNCIAS

1. Toda denuncia cursada por una autoridad competente cuya finalidad sea incoar un proceso ante la autoridad competente de la otra, se transmitirá a través de las Autoridades Centrales.
2. La Autoridad Central Requerida informará a la Autoridad Central Requirente el curso dado a la denuncia y remitirá, en su momento, una copia de la decisión tomada.

ARTICULO 24

EXENCION DE LEGALIZACION

Los documentos previstos en el presente Acuerdo estarán exentos de toda legalización consular o formalidad análoga.

ARTICULO 25

CONSULTAS

Las Autoridades Centrales de las Partes contratantes celebrarán consultas, para que el presente Acuerdo resulte lo más eficaz posible.

ARTICULO 26

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación de este Acuerdo será resuelta por consulta entre las Partes por vía diplomática.

ARTICULO 27

ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

El presente Acuerdo entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que las Partes se comuniquen por Notas Diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales.

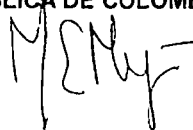
El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento, mediante Nota Diplomática, la cual surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte. La denuncia no afectará las solicitudes de asistencia judicial en curso.

Hecho en Buenos Aires, a los tres días del mes de abril de 1997, en dos ejemplares, en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA**



**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA**



[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT ON JUDICIAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF COLOMBIA

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Colombia,

Prompted by the desire to intensify judicial assistance and cooperation in criminal matters,

Recognizing that the fight against crime is a shared responsibility of the international community,

Considering the ties of friendship and cooperation uniting them,

Respecting the constitutional, legal and administrative norms of their States, as well as the principles of international law,

Reaffirming their respect for each other's national sovereignty, equal rights and interests.

Convinced of the need to take joint action to prevent, control and suppress crime in all its manifestations through coordinated activities and specific programmes, and to streamline traditional mechanisms of legal and judicial assistance in criminal matters.

Aware of the need to strengthen mechanisms for legal and judicial assistance and cooperation, in view of the increase in criminal activities,

Have agreed as follows:

Article 1 Scope

The Parties undertake to assist each other, in accordance with the provisions of this Agreement and of their respective legal regimes, in conducting investigations and criminal proceedings initiated in respect of acts which fall within the jurisdiction of the competent authorities of the requesting Party.

Assistance shall be provided even if the act in respect of which assistance has been requested does not constitute an offence under the laws of the requested Party.

However, if the request relates to the execution of any confiscation, provisional or precautionary measures, search of private property, interception of telecommunications or mail, or to judicial inspections, assistance shall be provided only if the act in respect of which such assistance is requested is also considered an offence under the law of the requested Party.

Article 2 Definitions

1. For purposes of this Agreement:

(a) "Letters rogatory, rogatory commission and request for judicial assistance" shall be regarded as synonymous.

(b) "Confiscation" means permanent removal of property, proceeds or instruments of crime, pursuant to the decision of a court or other competent authority.

(c) "Instruments of crime" means any property used or intended to be used for the commission of an offence.

(d) "Proceeds of crime" means property of any kind directly or indirectly derived or realized by any individual as a result of the commission of an offence, or its equivalent value.

(e) "Property" means any kind of assets whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible and legal documents or instruments evidencing title or other right thereto.

(f) "Preventive embargo, seizure or impoundment of property" means temporary prohibition on the transfer, conversion, disposal or release of property and temporary safekeeping or control of property pursuant to an order from a court or other competent authority.

Article 3 Scope of assistance

1. The Parties shall assist one another in the exchange of information, evidence, judgements and proceedings in criminal matters. Such assistance shall include, inter alia:

- (a) Location and identification of persons and property;
- (b) Service of process;
- (c) Delivery of judicial documents and information;
- (d) Execution of searches of private property and judicial inspections;
- (e) Taking of testimony and interrogation of defendants;
- (f) Summoning and voluntary transfer of defendants, witnesses or experts for the purposes of this Agreement;
- (g) Transfer of persons under arrest to give testimony in the territory of the requesting Party;
- (h) Embargo, seizure and confiscation of goods;
- (i) Any other form of assistance, provided that it is permitted under the law of the requested Party and is in accordance with the provisions of article 9 of this Agreement.

2. The Parties shall facilitate the entry into and presence in the territory of the requested Party of competent authorities of the requesting Party for the purpose of attending and participating in the conduct of the requested proceedings, provided that this does not conflict with the provisions of its domestic law. Officials of the requesting Party shall act in accordance with the authorization of the competent authorities of the requested Party.

Article 4 Limits on scope of assistance

1. The requesting Party shall not, without the prior consent of the requested Party, use any information or evidence obtained under this Agreement for purposes other than those stated in the request for judicial assistance.

2. This Agreement does not empower the Parties to perform in the territory of the State where the measures are being carried out, functions which, under the latter's domestic law, are reserved exclusively for the authorities of that State.

3. This Agreement does not apply to:

- (a) The detention of persons for purposes of extradition, or to extradition requests;
- (b) The transfer of convicted persons for the purpose of serving a sentence;
- (c) Assistance to individuals or third States.

Article 5 Central authorities

1. Requests for assistance made pursuant to this Agreement and replies thereto shall be sent and received through the central authorities, as indicated below:

(a) For the Argentine party, the central authority shall be the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship.

(b) As regards requests for assistance received by Colombia, the central authority shall be the Office of the Public Prosecutor; as regards requests for judicial assistance presented by Colombia, the central authority shall be the Office of the Public Prosecutor or the Ministry of Justice and Law.

2. To this end, the central authorities shall communicate with one another directly and shall refer requests to their competent authorities, as appropriate.

Article 6 Competent authorities

The Competent Authorities are, in the Argentine Republic, the judicial authorities and the prosecution service and, in the Republic of Colombia, the judicial authorities.

Article 7 Applicable law

(a) Unless otherwise provided in this Agreement, requests shall be executed in accordance with the law of the requested Party.

(b) The requested Party shall provide judicial assistance in accordance with the special forms and procedures indicated in the request from the requesting Party, unless these are incompatible with its domestic law.

Article 8 Confidentiality

1. The requested Party shall keep the request for judicial assistance confidential unless its disclosure is necessary for the execution of the request.

2. If it is necessary to lift the confidentiality requirement in order to comply with or execute the request, the requested Party shall seek the requesting Party's approval, in writing, failing which the request shall not be executed.

3. The requesting Party shall keep the evidence and information provided by the requested Party confidential, unless its disclosure is necessary for the investigation or proceedings outlined in the request.

Article 9 Requests for judicial assistance

1. Requests for judicial assistance shall be made in writing. If the matter is urgent or if this is permitted by the requested Party, they may be sent by facsimile or by any other electronic means, but must be formalized as soon as possible and must at least contain the following information:

(a) The name of the competent authority in charge of the investigation or judicial proceedings;

(b) The purpose of the request and a description of the assistance sought;

(c) A description of the acts which constitute the offence for which judicial assistance is being requested, together with a copy of the relevant legal provisions pertaining to the offence or excerpts therefrom;

(d) Details of any special procedures that the requesting Party wishes to be followed stating the reasons;

(e) The deadline by which the requesting Party would like the request to be met;

(f) If appropriate, the identity, nationality and residence or domicile of the individual to be served or notified and the relationship of such individual to the investigation or proceedings;

Where necessary, the identity, nationality and residence or domicile of the individual to be summoned to give evidence.

Article 10 Conditional assistance

1. Should the competent authority of the requested Party determine that execution of a request would interfere with a criminal investigation or proceedings under way in that State, it may postpone the execution or place such conditions thereon as it deems necessary.

2. The central authority of the requested Party shall accordingly inform the central authority of the requesting Party to see whether the latter agrees to the conditional assistance, in which case it will have to accept the conditions outlined.

3. Where the requested Party cannot comply in whole or in part with a request for judicial assistance, it shall inform the requesting Party, stating the reasons or grounds for its non-compliance, in which case the requesting Party shall decide whether to maintain or withdraw the request.

Article 11 Refusal of assistance

1. The requested Party may refuse to assist if:
 - (a) The request for judicial assistance is contrary to its legal regime or is not in conformity with the provisions of this Agreement;
 - (b) It believes that execution of the request would interfere with a criminal investigation or proceedings already instituted in that State, except as provided in article 10 of this Agreement;
 - (c) The request for judicial assistance relates to an offence in respect of which the individual has been found not guilty or, if convicted, has served a sentence, or the sentence has been extinguished; or
 - (d) The investigation has been opened for the purpose of prosecuting or discriminating in any way against a person or group of persons on account of race, sex, social status, nationality, religion, ideology or any other form of discrimination;
 - (e) The granting of assistance may affect the public order, security, national sovereignty or fundamental public interests of the requested State;
 - (f) The request for judicial assistance refers to a political or military offence or is related thereto.
2. The requested Party shall inform the requesting Party, of its refusal, in writing and state its reasons for so doing.

Article 12 Execution of the request for judicial assistance

1. Upon request from the requesting Party the requested Party shall set the date and place for execution of the request for judicial assistance and shall communicate them, in writing.
2. Evidence taken by the competent authorities of the requested Party shall be taken in accordance with its legal system. The assessment of such evidence shall be governed by the legal system of the requesting Party.
3. The requested Party may, in accordance with its domestic law and, at the request of the requesting Party, take testimony from persons for purposes of proceedings or investigations being pursued in the requesting State. The latter may request that such evidence be taken in accordance with the procedures specified in the request.
4. The list of questions to be put shall be submitted in writing and the requested Party, after evaluating it shall decide whether or not it is appropriate.
5. If asked to do so by the requesting Party, the requested Party may provide, for evidential purposes, copies of official or private documents, records or information held by a governmental or private agency or branch thereof, provided that this is permissible under its domestic law.
6. The original text of evidence taken by the competent authorities of the requested Party, a certified copy thereof, shall be sent to the requesting Party through the Central Authority.

7. Any documents or articles sent in execution of a request for judicial assistance shall be returned as soon as possible by the competent authority of the requesting Party, unless the requested Party surrenders them.

Article 13 Appearance before the requesting Party

1. Any request for judicial assistance sent to the competent authorities of the requested Party that involves a summons for a defendant, witness or expert to appear before the competent authorities of the requesting Party, shall be transmitted through the Central Authority of the requesting Party at least 45 days prior to the date set for the proceedings referred to in the request. Otherwise the Central Authority of the requested Party shall return the request to the requesting Party. Nonetheless, the Central Authority of the requested Party may ask the requesting Party in writing for extension of the deadline.

2. The competent authority of the requested Party shall proceed to serve the summons in accordance with the request formulated, but without giving effect to the clauses pertaining to restraint or punishment provided under the law of the requesting Party for failure to appear.

3. The request for judicial assistance shall mention the amount of any per diem, subsistence allowance or compensation payable to the person summoned.

Article 14 Temporary Guarantee

1. No witness or expert appearing before the competent authority of the requesting Party in response to a summons shall be prosecuted or detained for acts or sentences predating his or her departure from the territory of the requesting Party.

2. Irrespective of nationality, no person who has given consent, in writing, to appear before the competent authorities of the requesting Party in order to answer for acts that are the subject of proceedings against him or her may be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of personal freedom for acts or sentences predating his or her departure from the territory of the requested Party other than those to which the summons relates.

3. The temporary guarantee referred to in the above paragraphs shall cease if, after making such appearance, the person having had an opportunity to do so, has not left the territory of the requesting Party 10 days after receipt of notification from the competent authorities that his or her presence is no longer needed, or if, having left, he or she returns to that country, except in cases of force majeure or unforeseeable circumstances.

Article 15 Transfer of persons in custody

1. (a) If the summons to testify before the competent authority of the requesting Party relates to a person who is in custody in the territory of the requested Party, he or she must consent, in writing, in order for the request to be granted.

(b) The competent authority of the requesting Party shall be required to keep the person transferred in custody and to return him or her in the same conditions as soon as the need that prompted the request that led to the transfer has been met, unless the competent

authority of the requested Party specifically requests in writing that the individual be released.

(c) Expenses relating to the implementation of this article shall be the responsibility of the requesting Party.

2. In any event, the decision to make any transfer pursuant to paragraph 1 above, shall be up to the discretion of the competent authority of the requested Party and the latter may refuse a request for, inter alia, reasons of convenience or security.

Article 16 Proceeds of crime

1. Upon receiving a request for judicial assistance, the competent authorities of the requested Party shall endeavour to ascertain whether there are any proceeds or instruments of crime within their jurisdiction and shall notify the competent authorities of the requesting Party of the results of their inquiries, through the Central Authorities. When making the request, the requesting Party shall notify the requested Party of the basis for its belief that such proceeds or instruments may be located within the latter's jurisdiction.

2. Where pursuant to paragraph 1, proceeds or instruments of a crime referred to in the request for judicial assistance are found, the requested Party shall, at the request of the requesting Party, take such measures as are permitted under its laws to prevent any dealing in, transfer or disposal of such proceeds or instruments pending a final determination in respect thereof.

3. Where the person convicted of an offence has disposed of the proceeds or instruments thereof, the competent authority of the requested Party shall, at the request of the competent authority of the requesting Party, determine whether the transferee obtained the property without notice that it was or may have been the proceeds or instruments of an offence. If the competent authority of the requested Party determines that the transferee did not act in good faith it shall order that the property be confiscated.

Article 17 Provisional or precautionary measures

1. Without prejudice to article 1 and in accordance with the provisions of this article, the competent authority of either Party may ask the other to obtain an order for the purpose of placing a preventive embargo on, seizing or impounding property in order to ensure that the latter is available for purposes of the execution of a confiscation order.

2. A request submitted under this article shall include:

(a) A copy of the order requesting preventive embargo, seizure or impoundment;

(b) A summary of the facts of the case, including a description of the offence, where and when it was committed and references to the relevant legal provisions;

(c) If possible, a description of the property in respect of which the provisional or precautionary measure is to be implemented or that is considered available for preventive embargo, seizure or impoundment, for its commercial value and its relation to the person against whom legal proceedings have been or are to be instituted;

(d) A statement of the amount to be embargoed, seized or impounded and the basis for the calculation of this amount;

(e) An estimate of how long it will take for the case to be brought to trial and how long it will take for a final judgement to be handed down.

3. The competent authority of the requesting Party shall inform the competent authority of the requested Party of any change in the time frame referred to in paragraph (e) above, and indicate at the same time what stage the proceedings have reached.

4. The competent authorities of each Party shall promptly inform each other of any application filed or decision taken with respect to the embargo, seizure or impoundment requested or adopted.

5. The competent authority of the requested Party may set a condition limiting the duration of the measure requested and shall promptly notify the competent authority of the requesting Party of such condition stating its reasons for so doing.

6. Any request shall be executed solely in accordance with the domestic law of the requested Party and, in particular, with strict respect for and guarantee of the rights of any individual who may be affected by execution of the measure.

Article 18 Execution of confiscation orders

1. Where the request for assistance refers to a confiscation order, the competent authority of the requested Party may, without prejudice to the provisions of article 1:

(a) Execute the confiscation order issued by a competent authority of the requesting Party in respect of instruments or proceeds of a crime; or

(b) Initiate proceedings with a view to obtaining a confiscation order pursuant to its domestic law.

2. Without prejudice to the provisions of Article 9 of this Agreement, for the purposes of this article, [the request] shall include the following:

(a) A copy of the confiscation order, duly certified by the judicial officer who issued the order;

(b) Information concerning the evidence upon which the confiscation order was based;

(c) Information indicating that the judgement is enforceable;

(d) Where appropriate, details regarding the property available for the execution or in respect of which judicial assistance is being requested, including the relationship between such property and the person named in the confiscation order;

(e) Where applicable and available, information concerning any records with regard to third parties' legitimate rights to or interests in the property mentioned in the request;

(f) Any other information that may be helpful for purposes of executing the request for judicial assistance.

3. When it is not possible under the domestic law of the requested Party to execute the request in full, the latter may execute the request to the extent possible and shall report as much through the Central Authority.

4. The competent authority of the requested Party may ask for additional information or evidence with a view to executing the request.

5. The confiscation order shall be executed in accordance with the domestic law of the requested Party and, in particular, with respect for the rights of any individual who may be affected by execution of the order.

6. In any event, the requested Party may decide, together with the requesting Party, how to divide the value of the property obtained as a result of its execution of the request pursuant to this article, taking into consideration the guidelines established in Article 5, paragraph 5(b)(ii) of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 and bearing in mind how much information and cooperation was provided by the requested Party. The Parties may enter into supplementary agreements for the purpose of implementing the provisions of this paragraph.

Article 19 Interests of bona fide third parties in the property

In accordance with the provisions of this Agreement, the competent authorities of the requested Party shall take, in accordance with their laws such measures as are necessary to protect the interests and rights of bona fide third parties to the property affected by execution of requests for judicial assistance.

Any person affected by an order for preventive embargo, seizure, impoundment or confiscation may file an appeal as provided for under the domestic law of the requested Party with the competent authority of said Party.

Article 20 Expenses

1. The ordinary costs of executing a request for judicial assistance shall be paid by the requested Party. If extraordinary expenses are needed for such execution, the Parties shall consult one another in order to determine the terms and conditions for execution of the request and the manner in which such expenses shall be paid.

2. The expert fees, travel expenses, accommodation or other expenses of defendants accused, witnesses or experts who must travel pursuant to a request for judicial assistance, including officials accompanying them, shall be the responsibility of the requesting Party.

Article 21 Communication of sentences

Each Central Authority shall provide the other with an annual report of any convictions handed down by its judicial authorities against nationals of the other Party.

Article 22 Criminal records

1. Each Central Authority shall, upon request, provide the other with an individual's criminal records, to the extent that this is permitted under its own laws.

2. Criminal records shall be understood to mean only convictions contained in final judgements.

Article 23 Complaints

1. Any complaint submitted by a competent authority for the purpose of initiating proceedings before the competent authority of the other [Party] shall be transmitted through the Central Authorities.

2. The Central Authority of the requested Party shall inform to the Central Authority of the requesting Party of the action taken on the complaint and, in due course, shall send a copy of the decision taken.

Article 24 Exemption from authentication

The documents mentioned in this Agreement shall be exempt from consular authentication or any other similar formality.

Article 25 Consultations

The Central Authorities of the contracting Parties shall hold consultations with a view to enhancing the effectiveness of this Agreement to the utmost.

Article 26 Settlement of disputes

Any dispute arising between the Parties in relation to the interpretation or application of this Agreement shall be settled by means of consultations between the Parties through the diplomatic channel.

Article 27 Entry into force and denunciation

This Agreement shall enter into force sixty (60) days after the date on which the Parties notify one another through an exchange of diplomatic notes that their respective constitutional and legal requirements have been completed.

Either Party may denounce this Agreement at any time by means of a diplomatic note, which shall take effect six (6) months after the date on which it is received by the other Party. Such denunciation shall not affect requests for judicial assistance already being processed.

DONE at Buenos Aires on the third day of April 1997, in two originals in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Argentine Republic

[GUIDO DI TELLA]

For the Government of the Republic of Colombia

[MARÍA JEJÍA VELEZ]

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

Les Gouvernements de la République argentine et de la République de Colombie,
Ayant le dessein de renforcer l'entraide judiciaire et la coopération en matière pénale;
Reconnaissant que la lutte contre la délinquance exige une action commune des États;
Considérant les liens d'amitié et de coopération qui les unissent;

En conformité avec les règles constitutionnelles, juridiques et administratives de leur État respectif et dans le respect des principes du droit international;

Réaffirmant le respect de la souveraineté nationale et de l'égalité de leurs droits et intérêts réciproques;

Convaincus de la nécessité de mener des actions communes de prévention, de contrôle et de répression de la criminalité sous toutes ses formes en coordonnant et en exécutant des programmes concrets, ainsi que de renforcer les mécanismes traditionnels de coopération et d'entraide juridique et judiciaire en matière pénale;

Convient comme suit :

Article premier Champ d'application

Les Parties s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Accord et de leur ordre juridique respectif, une entraide aux fins des poursuites concernant les faits qui ressortissent à la compétence des autorités compétentes de la Partie requérante.

L'entraide est accordée même si les faits qui en motivent la requête ne constituent pas des infractions aux lois de la Partie requise.

Toutefois, lorsque la requête aux fins de l'entraide concerne l'exécution d'une saisie, de mesures provisoires ou conservatoires, de perquisitions domiciliaires, d'interception de communications et de correspondance ou de descentes de justice, l'entraide n'est accordée que si le fait qui en motive la requête est aussi considéré comme des infractions aux lois de la Partie requise.

Article 2 Définitions

1. Aux fins du présent Accord :

a) Les expressions « commission rogatoire », « requête aux fins d'entraide judiciaire » et « requête d'entraide judiciaire » s'entendent comme synonymes;

b) Le terme « confiscation » s'entend de la privation définitive de biens, de produits ou d'instruments d'un délit, par décision d'une juridiction pénale ou autre autorité compétente;

c) L'expression « instrument d'un délit » s'entend de tout bien utilisé ou destiné à être employé pour commettre un délit;

d) L'expression « produits d'un délit » s'entend de tout bien, de quelque nature que ce soit, tiré ou obtenu directement ou indirectement, par qui que ce soit, de la commission d'un délit, ou de la contre-valeur de ce bien;

e) Le terme « bien » s'entend de tout actif de quelque nature, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, ainsi que des pièces ou actes juridiques attestant de sa propriété ou de la possession d'autres droits sur ledit actif;

f) Les expressions « saisie conservatoire », « blocage » ou « mise sous séquestre » s'entendent de l'interdiction temporaire de céder, convertir, aliéner ou mobiliser un bien, ainsi que de la garde de biens aux fins de leur préservation par une juridiction ou par une autorité compétente.

Article 3 Portée de l'entraide

1. Les Parties s'entraident aux fins de l'échange de renseignements, d'éléments de preuve, de poursuites et d'actions pénales. Ladite entraide comprend :

- a) La localisation et l'identification de personnes et de biens;
- b) La signification d'actes de procédure judiciaire;
- c) La remise de pièces et d'informations judiciaires;
- d) L'exécution de perquisitions domiciliaires et de descentes de justice;
- e) L'audition de témoins et l'interrogatoire d'inculpés;
- f) La citation et le transfèrement volontaire d'individus aux fins du présent Accord, en qualité d'inculpés, de témoins ou d'experts;
- g) Le transfèrement de détenus aux fins de témoigner dans le territoire de la Partie requérante;
- h) La saisie, la mise sous séquestre et la confiscation de biens;
- i) Toute autre forme d'aide autorisée par les lois de la Partie requise et conforme aux dispositions de l'article 9 du présent Accord.

2. Les Parties facilitent l'entrée et le séjour dans le territoire de l'État requis des autorités compétentes de la Partie requérante afin qu'elles assistent et participent à l'exécution des actions requises, sous réserve que cela ne contreviennent pas aux dispositions de leur législation interne. Les fonctionnaires de la Partie requérante se conforment aux termes de l'autorisation donnée par les autorités compétentes de la Partie requise.

Article 4 Restrictions à l'entraide

1. Sauf autorisation préalable de la Partie requise, la Partie requérante ne peut employer aucun renseignement ou élément de preuve obtenu en application du présent Accord à des fins autres que celles qui sont déclarées dans la requête d'entraide judiciaire.

2. Le présent Accord n'habilite aucune Partie à exercer, dans le territoire de l'État où les mesures sont exécutées, des fonctions qui, aux termes de la législation interne, sont réservées aux autorités dudit État.

3. Le présent Accord ne s'applique pas :

- a) À l'arrestation d'un individu aux fins de son extradition, ni aux requêtes aux fins d'extradition;
- b) Au transfèrement d'un condamné aux fins de purger une peine;
- c) À l'assistance à des particuliers ou à des États tiers.

Article 5 Autorités centrales

1. Les requêtes aux fins d'entraide présentées en application du présent Accord et les réponses à ces requêtes sont envoyées et reçues par l'entremise des autorités centrales ci-après désignées :

a) Pour la Partie argentine, l'autorité centrale est le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte;

b) Pour ce qui concerne les requêtes aux fins d'entraide reçues par la Colombie, l'autorité centrale est le Procureur général de la Nation; pour ce qui concerne les requêtes aux fins d'entraide présentées par la Colombie, l'autorité centrale est le Procureur général de la Nation ou le Ministère de la justice et du droit.

2. À cette fin, les Parties communiquent directement entre elles et remettent les requêtes, selon le cas, à leurs autorités compétentes.

Article 6 Autorités compétentes

Les autorités compétentes sont, en République argentine, le pouvoir judiciaire et le Ministère public et, en République de Colombie, le pouvoir judiciaire.

Article 7 Droit applicable

a) Sauf disposition contraire du présent Accord, les requêtes sont exécutées en conformité avec la législation de la Partie requise;

2. La Partie requise fournit l'entraide selon les formes et les procédures particulières prévues dans la requête de la Partie requérante, à moins que celles-ci soient incompatibles avec sa législation interne.

Article 8 Confidentialité

1. La Partie requise préserve le caractère confidentiel de la requête d'entraide judiciaire, à moins que la levée du secret ne soit nécessaire à son exécution.

2. Si l'exécution de la requête exige la levée du secret, la Partie requise demande par écrit à la Partie requérante de donner son assentiment, faute duquel la requête n'est pas exécutée.

3. La Partie requérante préserve le caractère confidentiel des éléments de preuve et des renseignements fournis par la Partie requise, à moins que la levée du secret ne soit nécessaire à l'instruction, à l'enquête ou aux poursuites pénales décrites dans la requête.

Article 9 Requêtes aux fins de l'entraide judiciaire

1. La requête aux fins de l'entraide judiciaire doit être présentée par écrit. En cas d'urgence ou si la Partie requise le permet, la requête peut être présentée par télécopie ou par tout autre moyen électronique, sous réserve qu'elle soit confirmée formellement dans les plus brefs délais possibles; la requête doit contenir les mentions suivantes :

a) Dénomination de l'autorité compétente chargée de l'enquête ou instruction pénale ou des poursuites judiciaires;

b) Objet de la requête et description des mesures d'entraide requises;

c) Description des faits constitutifs du délit motivant la requête d'entraide judiciaire, accompagnés d'un exemplaire ou de la transcription du texte des dispositions juridiques relatives audit délit;

d) Description détaillée et fondement de toute procédure particulière dont la Partie requérante demande l'exécution;

e) Délais dans lesquels la Partie requérante demande que la requête soit exécutée;

f) Le cas échéant, identité, nationalité et résidence ou domicile de la personne à citer ou à notifier et relation de cette personne avec l'enquête, l'instruction ou les poursuites pénales;

Le cas échéant, identité, nationalité et résidence ou domicile de la personne à citer pour présenter des éléments de preuve.

Article 10 Entraide conditionnelle

1. Si l'autorité compétente de la Partie requise constate que l'exécution d'une requête ferait obstacle à une enquête, instruction ou poursuite pénale en cours dans son État, elle peut ajourner l'exécution de ladite requête ou l'exécuter sous les conditions qu'elle juge nécessaires.

2. L'autorité centrale de la Partie requise notifie la décision qu'elle a prise aux termes du paragraphe précédent à l'autorité centrale de la Partie requérante afin que celle-ci accepte et respecte les conditions de l'entraide.

3. Si la requête d'entraide judiciaire ne peut être exécutée en tout ou en partie, la Partie requise en informe la Partie requérante en exposant expressément les motifs de l'inexécution, auquel cas la Partie requérante décide soit de maintenir la requête soit de la retirer.

Article 11 Rejet de la requête

1. La Partie requise peut refuser l'entraide lorsque :

a) La requête d'entraide judiciaire est contraire à son ordre juridique ou n'est pas conforme aux dispositions du présent Accord;

b) Elle estime que l'exécution de la requête ferait obstacle à une enquête, instruction ou poursuite pénale en cours dans son État, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent Accord;

c) L'individu visé dans la requête d'entraide judiciaire a été exonéré en dernière instance de toute responsabilité pénale ou, s'il a été condamné, a purgé sa peine ou cette peine a expiré;

d) L'enquête ou l'instruction pénale a été ouverte dans le dessein d'engager des poursuites ou d'exercer une discrimination de quelque forme que ce soit contre un individu ou un groupe d'individus pour des motifs de race, de sexe, de condition sociale, de nationalité, de religion, d'idéologie ou toute autre forme de discrimination;

e) L'exécution des mesures requises porterait atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sûreté nationale ou aux intérêts essentiels de l'État requis;

f) La requête d'entraide judiciaire se réfère à un délit politique, militaire ou assimilé.

2. La Partie requise notifie par écrit le rejet de la requête à la Partie requérante en précisant les motifs sur lesquels elle se fonde.

Article 12 Exécution de la requête aux fins de l'entraide judiciaire

1. La Partie requise fixe la date et le lieu d'exécution de la requête d'entraide judiciaire et les notifie par écrit à la Partie requérante qui en fait la demande.

2. Les éléments de preuves demandés sont recueillis par les autorités compétentes de la Partie requise en conformité avec son ordre juridique. Ils sont validés comme en dispose l'ordre interne de la Partie requérante.

3. La Partie requise peut, en conformité avec sa législation interne et à la demande de la Partie requérante, recueillir des témoignages aux fins d'une poursuite, d'une enquête ou d'une instruction pénale en cours dans le for de la Partie requérante. La Partie requérante peut demander que ces témoignages soit recueillis selon les procédures précisées dans la requête.

4. Le texte de l'interrogatoire concernant le témoignage à recueillir doit être communiqué par écrit à la Partie requise, laquelle l'étudie et décide de procéder ou non audit interrogatoire.

5. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, remettre à titre d'éléments de preuve des copies de pièces ou actes officiels ou privés, ou de dossiers ou renseignements détenus par un organisme ou un service public ou privé de ladite Partie, sous réserve que sa législation interne l'y autorise.

6. Les éléments de preuves recueillis par les autorités compétentes de la Partie requise sous forme de pièces originales ou de copies authentifiées sont remis à la Partie requérante par l'entremise de l'autorité centrale.

7. Les pièces ou objets qui sont remis en exécution d'une requête d'entraide judiciaire doivent être restitués le plus tôt possible par l'autorité compétente de la Partie requérante, à moins que la Partie requise n'y renonce.

Article 13 Comparution dans le for de la Partie requérante

1. La requête d'entraide judiciaire adressée aux autorités compétentes de la Partie requise aux fins de citer un inculpé, un témoin ou un expert à comparaître devant les autorités

compétentes de la Partie requérante doit être transmise par l'autorité centrale de la Partie requérante au moins 45 jours avant la date fixée pour la comparution faisant l'objet de la requête.

Dans le cas contraire, l'autorité centrale de la Partie requise renvoie la requête à la Partie requérante. L'autorité centrale de la Partie requise peut cependant demander par écrit à la Partie requérante de prolonger le délai d'exécution.

2. L'autorité compétente de la Partie requise signifie la citation à comparaître conformément à la requête, mais les dispositions en vigueur dans le for de la Partie requérante en matière de contrainte et de sanctions ne s'appliquent pas en cas de non-comparution.

3. La requête d'entraide judiciaire doit mentionner le montant des indemnités de déplacement, de séjour et autres auxquelles l'individu cité a droit aux fins de sa comparution.

Article 14 Sauf-conduit

1. Le témoin ou l'expert qui, en réponse à une citation, comparaît devant l'autorité compétente de la Partie requérante, ne peut, alors qu'il se trouve dans le territoire de la Partie requérante, être poursuivi ou arrêté pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucun individu, de quelque nationalité que ce soit, qui consent par écrit à comparaître devant les autorités compétentes de la Partie requérante aux fins de répondre de faits qui motivent des poursuites contre lui, ne peut être inculpé ou arrêté, ni faire l'objet d'aucune autre restriction de sa liberté individuelle, pour des faits ou condamnations, antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, différents de ceux qui sont précisés dans la citation à comparaître.

3. Le sauf-conduit prévu aux paragraphes précédents cesse de s'appliquer si l'individu qui comparaît, ayant la faculté de quitter le territoire de la Partie requérante, s'y trouve encore à l'expiration d'un délai de dix jours après que les autorités compétentes l'ont informé que sa présence n'est plus nécessaire ou s'il revient dans le territoire de la Partie requérante après l'avoir quitté, sauf force majeure ou événement fortuit.

Article 15 Transfèrement de détenus

a) Si la requête portant citation à comparaître devant l'autorité compétente de la Partie requérante concerne un individu détenu dans le territoire de la Partie requise, il ne peut être fait droit à la requête sans le consentement écrit de l'individu cité;

b) L'autorité compétente de la Partie requérante est tenue d'assurer la garde du détenu transféré et de remettre celui-ci dans les mêmes conditions dès que sa présence n'est plus nécessaire aux fins qui ont motivé son transfèrement, à moins que l'autorité compétente de la Partie requise ne demande expressément par écrit que ledit détenu soit élargi;

c) Les frais entraînés par l'application du présent article sont à la charge de la Partie requérante.

2. L'autorité compétente de la Partie requise décide en tout cas à son entière discrétion d'accorder ou de refuser le transfèrement au titre du paragraphe 1 du présent article; le refus

de transférer peut se fonder, entre autres considérations, sur des motifs de convenance ou de sûreté.

Article 16 Produits du délit

1. Les autorités compétentes de la Partie requise, agissant en exécution d'une requête d'entraide judiciaire, s'efforcent d'établir si quelque produit ou instrument du délit se trouve dans leur for territorial et elles notifient les résultats de leurs recherches aux autorités compétentes de la Partie requérante par l'entremise des autorités centrales. En présentant ladite requête, la Partie requérante doit indiquer à la Partie requise les raisons qui l'amènent à croire que ledit produit ou instrument du délit se trouve dans le for territorial de celle-ci.

2. Si des produits ou instruments du délit qui sont visés dans la requête d'entraide judiciaire sont trouvés en application du paragraphe 1, la Partie requise, agissant à la requête de la Partie requérante, adopte les mesures conservatoires permises par ses lois pour éviter toute transaction, cession ou aliénation relative auxdits produits ou instruments, dans l'attente d'une décision définitive à leur égard.

3. Si l'individu reconnu coupable a aliéné les produits ou instruments du délit, l'autorité compétente de la Partie requise, agissant à la requête de la Partie requérante, détermine si le tiers détenteur desdits produits ou instruments les a obtenus sans savoir ni soupçonner qu'il s'agissait ou pouvait s'agir des produits ou instruments d'un délit. Si l'autorité compétente de la Partie requise constate que le tiers n'a pas agi de bonne foi, elle ordonne la confiscation des biens.

Article 17 Mesures provisoires ou conservatoires

1. Sans préjudice des dispositions de l'article premier et en conformité avec celles du présent article, l'autorité compétente d'une des Parties peut demander à celle de l'autre Partie d'obtenir une ordonnance aux fins de la saisie conservatoire, du blocage ou de la mise sous séquestre de biens afin d'assurer que ceux-ci sont disponibles pour l'exécution d'une ordonnance aux fins de leur confiscation.

2. La requête présentée en application du présent article doit être accompagnée des pièces ci-après :

a) Un exemplaire ou une copie de l'ordonnance aux fins de la saisie conservatoire, du blocage ou de la mise sous séquestre des biens concernés;

b) Un exposé des faits de l'espèce, y compris une description du délit, la mention du lieu et du moment où le délit a été commis, et un renvoi aux dispositions juridiques pertinentes;

c) Si possible, la description et la valeur marchande des biens à l'endroit desquels la mesure provisoire ou conservatoire est requise, ou qui sont considérés comme pouvant être l'objet de saisie conservatoire, blocage ou mise sous séquestre, ainsi que le rapport entre ces biens et la personne contre laquelle l'action est ou sera engagée;

d) Une déclaration de la somme dont la saisie conservatoire, le blocage ou la mise sous séquestre sont requis, avec mention des éléments pris en compte pour son calcul;

e) Une estimation du temps qui s'écoulera avant que l'espèce ne soit mise en jugement et qu'une décision en la matière ne soit rendue en dernière instance.

3. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise de toute modification des délais dont il est question à l'alinéa e) du paragraphe précédent, en précisant le stade alors atteint par la poursuite.

4. Les autorités compétentes de chacune des Parties se notifient sans délai l'exercice de tout recours contre une décision adoptée ou requise en matière de saisie conservatoire, blocage ou mise sous séquestre.

5. L'autorité compétente de la Partie requise peut imposer comme condition une limite à la durée de la mesure demandée; elle notifie alors cette condition et en explique les motifs à l'autorité compétente de la Partie requérante.

6. Toute requête doit être exécutée exclusivement en conformité avec la législation interne de la Partie requise, en particulier en observant et en garantissant les droits de toute personne qui pourrait être touchée par l'exécution de cette mesure.

Article 18 Exécution d'une ordonnance de confiscation

1. Si la requête d'entraide concerne une ordonnance aux fins de confiscation, l'autorité compétente de la Partie requise peut, sans préjudice des dispositions de l'article premier :

a) Exécuter l'ordonnance de confiscation rendue par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'égard des instruments ou produits du délit; ou

b) Engager une procédure visant à ce que soit rendue une ordonnance aux fins de confiscation en conformité avec sa législation interne.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent Accord, la requête dont il est question au présent article doit être accompagnée des pièces suivantes :

a) Une copie de l'ordonnance de confiscation, dûment certifiée par l'officier de justice qui l'a délivrée;

b) Des renseignements concernant les éléments de preuve sur la foi desquels a été rendue l'ordonnance de confiscation;

c) Des renseignements indiquant que la décision de justice est dûment exécutoire;

d) Si besoin, l'identification des biens disponibles pour l'exécution de la requête ou à l'égard desquels l'entraide judiciaire est requise, en précisant le rapport entre ces biens et la personne à l'endroit de laquelle a été rendue l'ordonnance de confiscation;

e) Les renseignements pertinents connus quant à de l'existence de droits ou intérêts légitimes de tiers sur les biens visés par la requête;

f) Tout autre renseignement pouvant contribuer aux fins de l'exécution de la requête d'entraide judiciaire.

3. Si la législation interne de la Partie requise n'autorise pas l'exécution de la requête dans sa totalité, la Partie requise peut l'exécuter dans la mesure permise par ses lois et en informer la Partie requérante par l'entremise de l'autorité centrale.

4. L'autorité compétente de la Partie requise peut demander des renseignements ou éléments de preuve additionnels aux fins de l'exécution de la requête.

5. L'ordonnance de confiscation est exécutée en conformité avec la législation interne de la Partie requise et en particulier dans le respect des droits de toute personne qui pourrait être touchée par son exécution.

6. La Partie requise peut en tout cas convenir avec la Partie requérante de la formule à employer pour la répartition de la valeur des biens confisqués en exécution de la requête présentée par la Partie requérante en application du présent article, en tenant compte des lignes directrices énoncées à l'alinéa b) ii) du paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, ainsi que de l'importance des renseignements et de la coopération fournis par la Partie requérante.

Les Parties peuvent conclure des accords complémentaires aux fins de l'application des dispositions du présent article.

Article 19 Intérêts des tiers de bonne foi à l'endroit des biens

Conformément aux dispositions du présent Accord, les autorités compétentes de la Partie requise adoptent, selon les lois qui les régissent, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de tiers de bonne foi à l'endroit des biens qui sont touchés par l'exécution des requêtes d'entraide judiciaire.

Toute personne touchée par une ordonnance de saisie conservatoire, de blocage, de mise sous séquestre ou de confiscation de biens peut opposer à l'autorité compétente de la Partie requise les recours prévus par la législation interne de cette Partie.

Article 20 Frais

1. La Partie requise prend en charge les frais ordinaires exposés pour faire droit à la requête d'entraide judiciaire. Lorsque l'exécution de la requête exige des frais extraordinaires, les Parties se concertent afin de déterminer les termes et les conditions d'exécution de la requête ainsi que la formule de répartition des frais.

2. Les honoraires des experts, ainsi que les frais de déplacement, de logement et autres des inculpés, des témoins et des experts qui sont appelés à se déplacer, y compris les frais des fonctionnaires qui les accompagnent, sont à la charge de la Partie requérante.

Article 21 Notification des peines

Chaque autorité centrale notifie à l'autre, chaque année, les jugements portant condamnation prononcés par ses autorités judiciaires contre des nationaux de l'autre Partie.

Article 22 Casiers judiciaires

1. Chaque autorité centrale communique à l'autre, sur demande, le casier judiciaire de tout individu, dans la mesure où l'autorisent les lois qui la régissent.

2. Le casier judiciaire communiqué comprend exclusivement les condamnations en dernière instance.

Article 23 Plaintes

1. Toute plainte émanant d'une autorité compétente dans le dessein d'intenter des poursuites devant l'autorité compétente de l'autre Partie doit être déposée par l'entremise des autorités centrales.

2. L'autorité centrale requise tient l'autorité centrale requérante au courant de la suite donnée à la plainte et lui fait tenir, en temps voulu, copie de la décision rendue en la matière.

Article 24 Dispense d'authentification

Les pièces et actes dont il est question dans le présent Accord sont dispensés de toute authentification consulaire ou formalité analogue.

Article 25 Concertation

Les Autorités centrales des Parties contractantes se concertent afin d'assurer que le présent Accord soit le plus efficace possible.

Article 26 Règlement de différends

Les Parties se concertent par la voie diplomatique afin de régler tout différend qui s'élèverait entre elles en rapport avec l'interprétation ou l'application du présent Accord.

Article 27 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur 60 jours à compter de la date à laquelle les Parties se seront notifiées par la voie diplomatique l'accomplissement de leurs obligations constitutionnelles et juridiques respectives.

Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par une note diplomatique qui prend effet six mois après la date de sa réception par l'autre Partie. La dénonciation ne touche pas les requêtes d'entraide en cours.

Fait à Buenos Aires le 3 avril 1997 en deux exemplaires en langue espagnole, les deux textes étant également authentiques et faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République argentine :

[GUIDO DI TELLA]

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :

[MARÍA JEJÍA VELEZ]

